

Denuncia por ataques en RR.SS.

Como no era difícil presagiar, el uso de las redes sociales en acciones de asedio a determinadas postulaciones ha comenzado a permear la campaña presidencial. Lo sorprendente es que ello —un fenómeno global— haya abierto una disputa no entre rivales ubicados en las antípodas ideológicas, sino dentro del mismo sector que tendrá que sumar sus fuerzas en una probable segunda vuelta.

La difusión de videos y mensajes que ponían en duda la salud mental de la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, ha llevado a la candidata a acusar una “campaña asquerosa” en su contra proveniente de cuentas vinculadas al Partido Republicano. En este contexto, senadores de RN han planteado la presentación de una denuncia criminal en la fiscalía. Más allá de los problemas técnicos que supone establecer el origen de las publicaciones, las interacciones que se establecen en la red y la dificultad de configurar un tipo penal, distintas figuras de la oposición han subrayado los riesgos de judicializar una disputa esencialmente política. En una columna de opinión, el rector de la UDP, Carlos Peña, ha anotado que “la política exige a veces, y en verdad casi siempre, reprimir la propia subjetividad y en oca-

“Los ataques digitales contra la exalcaldesa son agraviantes e impropios. Sin embargo, no todas las rudezas de una campaña califican como delitos”.

siones tolerar cosas que en la vida personal serían inaceptables”, porque “soportar el maltrato es una de las virtudes de quien se dedica a la política de veras”.

Los ataques contra la exalcaldesa son agraviantes e impropios. Por lo mismo, tanto los republicanos como el candidato José Antonio Kast encaran el reto de tomar distancia de tales prácticas y denunciarlas. Sin embargo, no todos los ataques, las descalificaciones o las groserías que se emiten en el marco de una campaña pueden calificar como delitos, por ofensivos o reprochables que sean; en este sentido, el académico Cristóbal Bellolio ha subrayado que “el mundo de los republicanos es un mundo que ocupa artes que no son enteramente limpias, abusa de las fake news; eso se ha visto en todo el planeta, no solo en Chile”.

El uso de las redes sociales para inducir reacciones y comportamientos en la opinión pública, al margen de los hechos o los datos, no es nuevo ni privativo de un sector. En los últimos años, el estallido social, la

pandemia y los procesos constituyentes —en particular el primero— han sido un terreno fértil de falsedades, acusaciones infundadas, desfiguración de los hechos y teorías conspiratorias, conductas amplificadas en el ciberespacio; ciertamente, no hay un grupo ni sector político en condiciones de reclamar pureza en esta materia ni espacio para la indignación selectiva. Lo distintivo del episodio de Matthei es que sugiere una acción planificada orientada a obtener una meta política concreta. Desde luego la reacción de la candidata y de parte de su entorno ha sido también revisada en clave de campaña. El director de Criterio, Cristián Valdivieso, ha señalado que Matthei debe “mover el tablero” para diferenciarse.

Si bien el empleo de las redes sociales para manipular y polarizar a la opinión pública atenta contra la deliberación racional y la salud misma de la democracia, las herramientas para combatir la desinformación no deben tampoco abusar de los mecanismos judiciales para resolver las controversias, ni atentar contra el derecho de opinión de las personas; el borde entre las legítimas atribuciones regulatorias del Estado y la libertad de expresión es delgado y conviene cautelar que no se rompa; a la política compete proteger con inteligencia ambos valores.